

Concepción, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés.

**VISTO, Y TENIENDO PRESENTE:**

Que en la causa RIT O-550-2022, RUC 22-4-0397508-0, del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, se ha dictado sentencia el día 18 de agosto de 2022, la cual se pronunció sobre demanda por despido indirecto, nulidad del auto despido y cobro de prestaciones laborales y previsionales, interpuesta por doña NATALY MARCELA NAVARRETE RAMÍREZ, cédula de identidad N°15.879.055-6, psicóloga, domiciliado en calle Reconquista N°8011, comuna de Hualpén, en contra de su ex empleador, la sociedad TECNET S.A., en adelante también “TECNET”, R.U.T. N° 96.837.950-K, legalmente representada en los términos previstos en el artículo 4° del Código del Trabajo por don Fernando Verdeja, documento de identidad argentino N°14.038.242, ignora profesión u oficio, o por quien sus derechos representen, ambos domiciliados para estos efectos en calle Ricardo Claro N°1078, Pedro del Río Zañartu, comuna de Concepción, región del Bío Bío; y de forma solidaria o subsidiaria, conforme al mérito del proceso, a la COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., en adelante también “CGE”, empresa del giro de su denominación, R.U.T. N° 76.411.321-7, legalmente representada por don Iván Quezada Escobar, cédula nacional de identidad N° 10.051.615-2, ignora profesión u oficio, ambos con domicilio en Avenida Presidente Riesco N°5561, piso 17, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en su calidad de empresa mandante o principal, dueña de la obra, declarándose en la sentencia:

I.- Que, se acoge la demanda interpuesta por doña NATALI MARCELA NAVARRETE RAMÍREZ en contra de la sociedad TECNET S.A., y en contra de COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., todos individualizados, en cuanto, se declara que el empleador incumplió gravemente las obligaciones que impone el contrato de trabajo, condenándolas solidariamente al pago de las siguientes prestaciones, toda vez que existió un régimen de subcontratación entre las partes:

- a) Indemnización sustitutiva de aviso previo por la suma de \$1.109.689.
- b) Indemnización por años de servicio por la suma de \$11.096.890.
- c) Recargo legal del 50% lo que equivale a la suma de \$5.548.445.
- d) Feriado legal/proporcional por la suma de \$592.944.



e) Cuotas morsas e intereses Caja de Compensación Los Andes por la suma de \$149.466.

II.- Que, las sumas ordenadas pagar lo serán con intereses y reajustes previstos por los artículos 63 y 173 ambos del Código del Trabajo, según corresponda.

III.- Que, se declara nulo el despido indirecto de la trabajadora condenando solidariamente a las demandadas ya individualizadas, al pago de las remuneraciones y demás prestaciones laborales que se devenguen entre el auto despido y la declaración de liquidación concursal de la demandada principal, a razón de \$1.109.689.-.

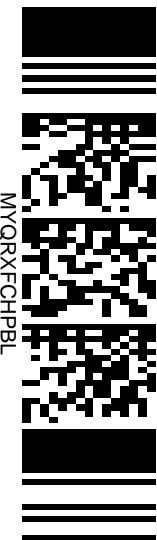
IV.- Que, las demandadas ya individualizadas deberán enterar solidariamente las cotizaciones previsionales impagas de la actora, sujetándose su cobro a lo dispuesto por la ley 17.322.

V.- Que, cada parte pagará sus costas.

En contra de la citada sentencia, la parte demandada COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A., representada por el abogado don Luis Navarro Egaña, interpuso recurso de nulidad laboral, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por cuanto la sentencia definitiva, según argumenta, fue dictada con infracción de la ley, que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

La recurrente invoca el artículo 477 del Código del Trabajo, pues estima que el sentenciador incurrió en sendas infracciones a los artículos 162 inciso 5to y artículo 183 – B inciso 1º, ambos del Código del Trabajo; y que la infracción en la aplicación de dichas normas, influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

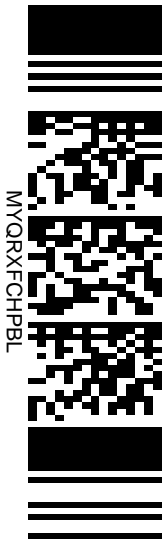
La recurrente, indica que su representada, ha sido demandada en calidad de empresa principal en régimen de subcontratación laboral, ello por cuanto con fecha 21 de abril de 2022, doña Nataly Navarrete Ramírez, ex trabajadora de TECNET S.A. empresa contratista, presentó demanda en juicio ordinario de despido indirecto, nulidad del despido y cobro de prestaciones laborales, en contra de su ex empleador y de Compañía General de Electricidad S.A., alegando que prestó servicios personales bajo dicha modalidad (subcontratación), en el cargo de asistente administrativo, entre los días 1 de abril de 2012 y 11 de abril de 2022, presentado su carta de auto despido en esa última fecha.



Señala que su representada, la Compañía general de Electricidad S.A solicitó el rechazo de la demanda interpuesta por la trabajadora de TECNECT S.A y, que el Juzgado del Trabajo, luego de la audiencia de juicio, dictó la sentencia definitiva, la cual acogió la demanda de autos, condenado solidariamente a TECNET S.A y la Compañía General de Electricidad S.A al pago de las indemnizaciones y prestaciones demandadas. En el caso de la nulidad del despido o Ley Bustos, se acogió dicha pretensión, condenando solidariamente a ambas demandadas -en virtud de dicha sanción- al pago de las remuneraciones posteriores al despido, limitadas hasta la fecha en que se declaró la liquidación concursal de TECNET S.A. en autos Rol C-3057-2022 del 29° Juzgado Civil de Santiago, resolución que se dictó con fecha 28 de junio de 2022.

La demandada de autos, señala que el vicio de la sentencia puede apreciarse derechamente, puesto que la sentencia condenó solidariamente a TECNET S.A y la Compañía General de electricidad S.A, al pago de las remuneraciones posteriores al despido, aplicando a esta parte la sanción de nulidad del despido o Ley Bustos, lo cual constituye una infracción a las normas legales establecidas en los artículos 162 inciso quinto y 183- B inciso primero del Código del Trabajo, al haberse extendido a la demandada solidaria y empresa principal, Compañía General de Electricidad S.A., la aplicación de dicha sanción, sin que expresamente tales normas legales (que regulan, respectivamente, la aplicación de dicha sanción, también conocida como Ley Bustos, y aquella responsabilidad a la cual se encuentra expuesta toda empresa principal bajo régimen de subcontratación) prevean o extiendan dicha figura legal a una persona distinta del empleador, situación en la cual se encuentra la Compañía General de Electricidad S.A, que no es el ex empleador sino que la empresa principal.

Manifiesta la recurrente que, la decisión de la sentenciadora implica que se la condena (que tiene el carácter de empresa principal, según lo dispuesto en las normas legales sobre subcontratación) al pago de prestaciones remuneracionales que van más allá de la fecha en que se terminaron de prestar los servicios por los trabajadores bajo régimen de subcontratación laboral a la Compañía General de Electricidad S.A, lo que infringe derechamente la normativa legal regulatoria de la materia, ello por cuanto la demandante, presentó auto despido ante su ex empleadora

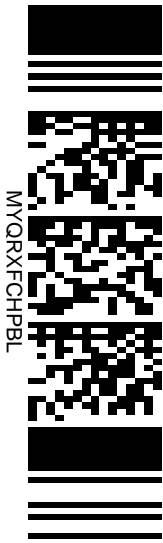


TECNET S.A en virtud de lo dispuesto en el artículo 160 N°7 del Código del Trabajo, es decir incumplimiento grave de las obligaciones, señalando que el artículo 183 – B del citado Código del Trabajo, hace responsable a la empresa principal respecto de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de estos, incluyendo eventuales indemnizaciones legales que correspondan, por término del contrato de trabajo, estableciéndose un claro límite temporal a la responsabilidad de la empresa principal, y que es el periodo durante el cual los trabajadores prestaron sus servicios bajo subcontratación para con ella, la empresa principal.

Sostiene la recurrente que legalmente la responsabilidad de la empresa principal (Compañía general de Electricidad S.A) tiene un límite en el tiempo, pues en caso alguno se extiende más allá de la fecha de término del trabajo en régimen de subcontratación que, en el caso concreto de estos autos, es aquella fecha en que la actora se auto despidió del trabajo que desempeñaba para Tecnet S.A., es decir, el día 11 de abril de 2022.

Para fundar su tesis, cita la historia fidedigna del establecimiento de la ley 20.123 que modificó el Código del Trabajo, y que vino a regular el trabajo bajo el régimen de subcontratación, indicando que el mensaje del ejecutivo no contenía ningún tipo de limitación, sin embargo, durante la tramitación parlamentaria se introdujo una limitación con la finalidad de establecer un término a la responsabilidad de la empresa principal. Además, cita una serie de sentencias de la Excelentísima Corte Suprema que abonan su tesis, como son las: Rol 5894-2011, Rol 2500-2012, y de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco: Rol 59-2014.

Finalmente, indica que la errada aplicación de la ley, en específico de los artículos 162 inciso 5° y 183-B inciso 1°, ambos del Código del Trabajo, han influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por lo que solicita a esta Corte que conociendo del recurso, lo acoja y anule la respectiva sentencia, dictando la correspondiente sentencia de reemplazo, que a su vez, rechace respecto a Compañía General de Electricidad S.A. la aplicación de la sanción establecida en el artículo 162 inciso quinto del Código del Trabajo (más conocida como nulidad del despido o Ley Bustos), lo anterior, con expresa condena a la contraria de las costas del recurso.

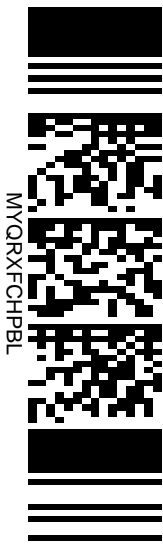


Habiendo sido declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación, y se llevó a efecto por video conferencia la audiencia en donde compareció el abogado Ignacio Jiménez Gallegos en representación de la recurrente Compañía General de Electricidad S.A, manifestando los argumentos que ya han sido desarrollados latamente, solicitando en definitiva que se acoja el presente recurso de nulidad, se anule la sentencia y, se dicte una de reemplazo; y, por su parte alega en contra del recurso, en representación de la demandante el abogado Felipe Valdivieso Salazar, quien solicita que se rechace el recurso con expresa condena en costas, indicando que la sentencia ha efectuado una correcta aplicación de la ley a los hechos probados, y que en los considerandos décimo cuarto y décimo quinto, entrega los fundamentos por los cuales la recurrente debe responder solidariamente como empresa principal, respecto de todas las obligaciones laborales por la que ha sido condenada.

**CON LO RELACIONADO, OÍDOS Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, como reiteradamente se ha sostenido, la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, sobre infracción de ley, tiene como finalidad velar porque el derecho sea correctamente aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras palabras, su propósito esencial está en fijar el significado, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos que se han tenido por probados.

Que el control que deben efectuar estos sentenciadores, en cuanto a la infracción de ley como causal de nulidad, es la confrontación de la sentencia con la ley llamada a regular el caso, lo que supone fidelidad a los hechos probados en la sentencia, pues lo que se ha de examinar-en casos como el de autos- es si tales hechos encuadran en el supuesto legal respectivo. En definitiva, para poder examinar el juzgamiento jurídico del caso resulta menester que los hechos a partir de los que se estructura la impugnación se encuentren fijados en la sentencia pues solo de cumplirse tal exigencia se podrá generar el debate sobre la infracción de ley que se denuncia.



**SEGUNDO:** Que la recurrente no cuestiona los hechos que la sentencia ha tenido por acreditados, y que se pueden leer en su considerando noveno.

Tampoco ha cuestionado que su representada, la Compañía General de Electricidad S.A sea la empresa principal, por lo que reconoce y no discute que en la especie se dan los requisitos de la subcontratación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 A del Código del Trabajo.

**TERCERO:** Que, la impugnación que hace la recurrente, es respecto de la aplicación que la sentencia efectúa de los artículos 162 inciso 5°, y 183 B inciso 1° del Código del Trabajo, en que verifica la existencia de un trabajo en régimen de subcontratación, extendiendo las sanciones establecidas en el inciso 5° del artículo 162 del citado Código del Trabajo, derivadas de la nulidad del despido, a la empresa principal, este caso, la Compañía General de Electricidad S.A, la cual fue condenada solidariamente de acuerdo con el considerando décimo quinto de la sentencia impugnada, al pago de todas las prestaciones laborales a que tiene derecho, durante el periodo en que la actora prestó efectivamente servicios para la empresa contratista TECNET S.A, y las respectivas remuneraciones y demás prestaciones laborales que se devenguen entre el auto despido y la declaración de liquidación concursal de la demandada principal, por tanto extendió la aplicación de la sanción del artículo 162 inciso 5° del Código del Trabajo, a un periodo de tiempo que va más allá, del cual la actora prestó efectivamente servicios como trabajadora de su empleadora, la contratista TECNET S.A.

En consecuencia, la impugnación que la recurrente efectúa al citado considerando décimo quinto de la sentencia, se basa en el argumento que su responsabilidad solidaria no puede extenderse más allá del periodo que en la actora prestó efectivamente servicios a la empresa principal, puesto que aquello, implicaría interpretar extensivamente una norma sancionatoria como lo es la contenida en el artículo 162 inciso 5to del Código del Trabajo.

**CUARTO:** Que el artículo 183 B del Código del Trabajo dispone: *“La empresa principal será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que*



*correspondan por término de la relación laboral. Tal responsabilidad estará limitada al tiempo o período durante el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal”.*

Por su parte el artículo 162 inciso 5° del Código del Trabajo dispone que: *“Para proceder al despido de un trabajador por alguna de las causales a que se refieren los incisos precedentes o el artículo anterior, el empleador le deberá informar por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen. Si el empleador no hubiere efectuado el integro de dichas cotizaciones previsionales al momento del despido, éste no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo”.*

Que, de acuerdo con las normas citadas, el legislador ha establecido un modelo de responsabilidad solidaria por parte de la empresa que encarga la obra o del contratista, con la finalidad de reguardar adecuadamente los derechos laborales del trabajador.

En este sentido, la sentencia cuestionada, indica en su considerando décimo quinto, que: *“la demandada CGE S.A, no probó haber hecho uso de los derechos de información y/o retención que le confiere la ley, por lo cual su responsabilidad es solidaria, incluyendo la sanción de nulidad en los términos referidos, toda vez que los incumplimientos previsionales se producen en el periodo en el cual se prestaron los servicios en régimen de subcontratación, existiendo por lo tanto la obligación legal de la demandada de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de su contratita para con los trabajadores de su dependencia, no alterando en consecuencia lo señalado, el hecho de haberse terminado anticipadamente el contrato entre las codemandadas pues durante todo el periodo del régimen de subcontratación la actora laboró prestando sus servicios en los términos ya indicados”.*

**QUINTO:** Que, la recurrente, para fundar su causal, reproduce una serie de fallos de la Excelentísima Corte Suprema, sin embargo, cabe hacer presente que la doctrina jurisprudencial que invoca, varió a partir del año 2015, cuando la cuarta sala del citado excelentísimo Tribunal, ha sostenido invariablemente que: *“la circunstancia que la responsabilidad solidaria de la empresa principal esté limitada al tiempo o periodo mientras los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación, porque como el hecho que genera la sanción que establece el artículo 162 del Código del trabajo se*



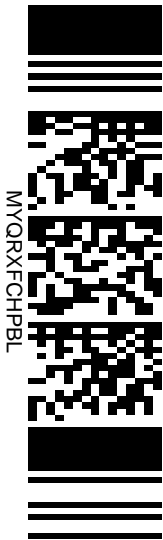
*presenta en la vigencia de dicho régimen, se tiene que concluir que la causa que provoca su aplicación – no pago de las cotizaciones previsionales – se originó en el ámbito que debe controlar y en el que la ley le asignó responsabilidad, por la utilidad que obtiene del trabajo prestado por los dependientes de un tercero y por la necesidad de cautelar el fiel cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales”.*

*Así, esta conclusión se ha entendido acorde con los objetivos de la ley que regula el trabajo en régimen de subcontratación, en la medida que establece un sistema de protección a los trabajadores que se desempeñan en dichas condiciones. Asimismo, porque la nueva normativa que regula el trabajo en régimen de subcontratación no excluye a la empresa principal de la aplicación de la ineficacia del despido de que trata el artículo 162 del Código del Trabajo, y tampoco fue materia de discusión o indicación durante la tramitación de la ley que lo contiene, N°20.123, lo que se puede apreciar del examen de la discusión parlamentaria llevada a cabo”. (Sentencia Rol 71578-2022, de fecha 20 de diciembre de 2022, en el mismo sentido, Rol 102864-2020 de 13 de mayo de 2021; y, Rol 48854-2022 de 30 de marzo de 2023.).*

En consecuencia, dicha argumentación basada en fallos dictados por la Excelentísima Corte Suprema, no puede servir de base para acoger el presente recurso, pues como se ha indicado, la línea jurisprudencial invocada por el recurrente, ha sido modificada en sentido contrario a partir del año 2015. Así, la cuarta sala de la Excelentísima Corte Suprema ha sostenido invariablemente el criterio de no limitar temporalmente la aplicación del artículo 162 inciso 5° del Código del Trabajo, al periodo en que el trabajador o trabajadora hubiesen prestado servicios en régimen de subcontratación, pues la sanción que se impone por la ley a la empresa principal, se da en el marco del control que debe efectuar la empresa dueña de la obra o faena, del pago de las remuneraciones, y cotizaciones previsionales de los trabajadores bajo régimen de subcontratación.

Que, de este modo, estos sentenciadores estiman que la sentencia no ha incurrido en una errada aplicación de la ley que hubiese influido en lo dispositivo del fallo.

**SEXTO:** Que, a mayor abundamiento y para rechazar el recurso, se debe tener presente que la sanción establecida en el inciso 5° del artículo





162 del Código del Trabajo se inserta en un sistema de protección del trabajador en cuanto al efectivo pago de sus cotizaciones previsionales y demás prestaciones. Así, por ejemplo, se establece en el artículo 33 de la Ley N°17.322 una figura penal que sanciona a quien no ha hecho un efectivo pago de las cotizaciones previsionales, todo lo cual se ha reforzado por el legislador con la modificación que efectúa la ley 19.631, y que sanciona al empleador infractor que no entera el pago de las cotizaciones previsionales.

Es más, nuestra Excelentísima Corte Suprema ha procedido a ir uniformando la aplicación de las normas sobre la extensión de los efectos de la nulidad del despido, incluso en aquellos casos en que el empleador se ha sometido a un procedimiento concursal y el contrato de trabajo ha terminado con anterioridad a la resolución de liquidación. Así por ejemplo en la sentencia Rol 34.447-2017 de 7 de marzo de 2018, dispuso en su considerando octavo: *“Que, atendido lo expuesto y considerando, al mismo tiempo, los términos del artículo 163 bis, tanto su inciso primero como el acápite final de su número 1.-, del Código del Trabajo, se debe concluir que solo regla la nueva causal de término de contrato de trabajo que se introduce a la normativa laboral, esto es, aquella que se configura por el hecho de someterse el empleador al procedimiento de liquidación; razón por la que se uniforma la jurisprudencia en el sentido que si el vínculo laboral cesó antes de la fecha en que se dictó la resolución que dispuso la liquidación del empleador, el efecto que establece el inciso quinto del artículo 162 del referido código se aplica hasta la convalidación del despido, por lo tanto, la masa de bienes debe responder por el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales devengadas en dicho periodo y, en forma subsidiaria, la dueña de la obra o faena (Junta Nacional de Jardines Infantiles)”*.

Dado lo anterior, las normas invocadas por el recurrente como infraccionadas por el sentenciador, se insertan en un sistema de protección del trabajador y, por tanto, la labor de los órganos jurisdiccionales será la de interpretar y aplicar dichas disposiciones legales, del modo como estas protejan de mejor manera al trabajador o trabajadora, teniendo siempre presente que la citada interpretación y aplicación de estas, se debe efectuar de conformidad con el principio *pro operario*.



**SÉPTIMO:** Que, en consecuencia, no cabe sino concluir que el recurso de nulidad en estudio, será desestimado, pues no ha existido una errada aplicación de la ley, que hubiese influido en lo dispositivo del fallo.

Por estos fundamentos y lo dispuesto en los artículos, 1, 2, 3, 7, 8, 159 y 425 a 459, 477, 478 del Código del Trabajo, y demás pertinentes **SE RECHAZA**, con costas, el recurso de nulidad deducido por el abogado don LUIS NAVARRO EGAÑA, en representación de la COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. en contra de la sentencia definitiva de fecha 18 de agosto de 2022, dictada por la Jueza doña Valeria Garrido Cabrera, Juez Titular del Juzgado de Letras y del Trabajo de Concepción, en causa RIT O-550-2022, RUC 22-4-0397508-0, la que en consecuencia no es nula.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción del abogado integrante Humberto Alarcón Corsi.

Nº Laboral - Cobranza-633-2022.



Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción integrada por Ministro Fabio Gonzalo Jordan D., Ministra Suplente Claudia Andrea Vilches T. y Abogado Integrante Humberto Andres Alarcon C. Concepcion, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés.

En Concepcion, a veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

